

## **PRIVATIZACIONES Y PODER POLÍTICO**

**Jorge Heine<sup>1</sup>**

### **Abstract**

During too much time the subject of the privatizations in Chile has been raised like something exclusively economic technician and, a species of synonymous of modernization. The one that the greater privatizador frenzy of the military government (the calls privatizations of third round) has agreed with the years of economic recovery of the 1982-83 crisis has taken to important sectors of the public opinion to assimilate privatizations with growth, when in fact these are only part of the elements that affect the economic dynamism of a country. This I articulate presents/displays from different authors and perspective, an analytical glance on this phenomenon.

### **Resumen**

Durante demasiado tiempo el tema de las privatizaciones en Chile ha sido planteado como algo exclusivamente técnico y económico, una especie de sinónimo de modernización. El que el mayor frenesí privatizador del gobierno militar (las llamadas privatizaciones de tercera ronda) haya coincidido con los años de recuperación económica de la crisis de 1982-83 ha llevado a importantes sectores de la opinión pública a asimilar privatizaciones con crecimiento, cuando en realidad éstas son sólo parte de los elementos que inciden en el dinamismo económico de un país. Este artículo presenta desde diferentes autores y perspectivas, una mirada analítica sobre este fenómeno.

---

<sup>1</sup> Jorge Heine es director de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales y director del programa internacional de la Fundación Chile 21.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  
CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN

Durante demasiado tiempo el tema de las privatizaciones en Chile ha sido planteado como algo exclusivamente técnico y económico, una especie de sinónimo de modernización. El que el mayor frenesí privatizador del gobierno militar (las llamadas privatizaciones de tercera ronda) haya coincidido con los años de recuperación económica de la crisis de 1982-83 ha llevado a importantes sectores de la opinión pública a asimilar privatizaciones con crecimiento, cuando en realidad éstas son sólo parte de los elementos que inciden en el dinamismo económico de un país. Es cierto que durante los últimos 20 años ha habido una verdadera marea privatizadora en todo el mundo, y también es cierto que en muchos casos el traspaso de empresas públicas a manos privadas ha redundado en mayores niveles de productividad, eficiencia y calidad de servicios. Lo que no es cierto es que las privatizaciones sean una especie de panacea que resuelva todos los problemas.

Tampoco es cierto que constituyan una herramienta de política pública neutra, sin profundos efectos políticos y sociales. De hecho, la temática de las motivaciones y propósitos políticos de las privatizaciones está generando una creciente masa de literatura académica, en la que se demuestra, por autores como Harvey Feigenbaum y Jeffrey Henig, que tanto o más importantes que las justificaciones económicas que se manifiestan en público para privatizar lo son los propósitos políticos de quienes las impulsan. Ejemplo de ello fue la intención de quebrar el poder de los sindicatos en la Inglaterra de Margaret Thatcher. La gran virtud del reciente libro de María Olivia Mockeberg *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*, publicado por Ediciones B (cuya copia me costó mucho conseguir, ya que la primera edición de 5 mil ejemplares se ha agotado en menos de una semana, y la vendedora en la librería en que finalmente lo ubiqué me dijo que en todos sus años en el rubro nunca había visto

tanta demanda del público lector por un libro) es que documenta con lujo de detalles el grado al cual el proceso de privatización que se dio en Chile en los '80 fue ante todo marcado por consideraciones políticas.

El desmantelamiento del Estado benefactor en Chile al terminar con el antiguo sistema de previsión y de provisión de salud, por una parte, y el transformar a las autoridades del gobierno militar y ejecutivos de las empresas públicas de ese entonces en los dueños de las empresas privatizadas, por otra, aparecen como dos caras de la misma moneda, cuyo resultado neto fue el tremendo debilitamiento del sector público, y la creación y fortalecimiento de grandes grupos económicos privados profundamente identificados con el pinochetismo. A partir de fuentes abiertas, y respaldada por muchos años de trabajo periodístico de primera línea, María Olivia Monckeberg nos entrega un cuadro completísimo de la forma cómo empresas públicas que tomó 40 años construir con los impuestos de todos los chilenos se vendieron a vil precio -y en muchos casos con créditos subsidiados de la CORFO y el Banco del Estado, es decir, con el dinero de los contribuyentes- a sus propios ejecutivos, quienes de modestos funcionarios públicos pasaron a poseer fortunas valoradas en cientos de millones de dólares. No es sorprendente que los grupos económicos creados en torno a estas privatizaciones, sobre todo en las AFP y las empresas del sector eléctrico, se hayan transformado en las principales fuentes de financiamiento de la Alianza por Chile en los años '90, creando un desbalance enorme con el resto de las fuerzas políticas. Tampoco asombra que los partidos de la Alianza bloqueen todo proyecto de ley que transparente el financiamiento de los partidos y la actividad política en general, ya que perderían esa enorme ventaja de la que han gozado hasta ahora. Lo que sí resulta inexplicable es que, después de todo esto, sigan existiendo dentro de la propia Concertación partidarios de seguir privatizando lo poco que queda del sector público en Chile. Dada la estructura del poder económico en Chile ¿quiénes son los únicos que podrían beneficiarse de ello?

## **DOCUMENTO DETALLA ORÍGENES EN EL RÉGIMEN DE PINOCHET**

### **Sebastián Minay**

En una iniciativa criticada en su momento, diputados oficialistas presentan hoy un informe que detalla la génesis de estos pagos, localizándola en las privatizaciones iniciadas en los ochenta, y describiendo los vínculos familiares, sociales y financieros de la clase económica actual, en manos de la derecha.

Una compleja ramificación de nombres de quienes hoy figuran como prominentes empresarios y personajes públicos -antes ministros y colaboradores del gobierno militar-, algunos de los cuales participaron en el proceso de privatización de las empresas públicas y otros que recibieron millonarias indemnizaciones, describe un extenso documento que conocerá hoy la sala de la Cámara de Diputados, cuando vote el informe de la comisión especial que investigó los abultados desahucios que han beneficiado a ejecutivos de empresas fiscales durante los últimos meses.

Entre éstos se menciona a Hernán Büchi, Álvaro Saieh, Miguel Ángel Poduje, Sergio de Castro, Carlos Cáceres, Bruno Philippi, Juan Hurtado, Julio Ponce Lerou, José Piñera, Ernesto Silva y José Yuraszeck, entre otros.

Bajo el título “El saqueo de los grupos económicos al estado chileno y la verdad oculta de las empresas públicas”, el texto ya había sido anunciado por el presidente de ese

grupo de trabajo, diputado Sergio Velasco (DC), quien además lo difundirá públicamente hoy, junto a su par PPD Eugenio Tuma.

En todo caso, se entiende que el documento es la formalización de la respuesta que fue levantada como discurso desde algunos sectores del oficialismo al estallar el escándalo de las indemnizaciones, a fines de septiembre pasado: que así como los pagos desclasificados a partir de Correos y Enap, durante el régimen militar se produjeron episodios similares e igualmente impresentables.

Precisamente, Velasco fue uno de los parlamentarios que insistió en esa idea, bajo el argumento que si de investigar se trataba, había que ir “hacia atrás” en el tiempo. Aunque dicha tesis perdió peso en un principio con todo, no era justificable minimizar el impacto comparando ambos episodios -, tres meses después de iniciado el caso se insiste en ese punto.

Así, las 74 páginas del documento –pródigo en datos, cifras, tablas e historiales que mezclan vínculos familiares, sociales y financieros-comienzan por mencionar que si frente al escándalo entonces desatado urgía una completa transparencia de los hechos, entonces había que buscar la génesis de éstos en los años del régimen militar. En esa línea, se sostiene que el asunto deriva del masivo proceso de privatización de empresas que se comenzó a ejecutar en los años ochenta: “...amén de una operación económica de pingues beneficios para los compradores, fue una estrategia política destinada a mantener el poder de ciertos grupos aún después del ocaso del gobierno militar”.

En este sentido, y en base a antecedentes recopilados por la Contraloría General de la República, se señala que en los últimos diez años se han pagado USD \$ 22 millones

por concepto de indemnizaciones, suma que también considera los dineros que la administración Aylwin canceló a funcionarios del régimen saliente.

A guisa de ejemplo, se menciona la situación de Codelco, donde cerca la mitad de los desahucios pagados en el período 1990-2000 correspondieron a esos casos. En 1990, los beneficiados del gobierno militar recibieron \$4.460.866.171. En 1994, los que dejaron cargos al terminar el período de Aylwin fueron beneficiados con \$2.166.747.733 por el gobierno de Frei. A su vez, la actual administración ha debido desembolsar \$2.081.218.840.

El documento subraya que los márgenes para las indemnizaciones que hasta hace pocos meses regían para la Empresa Nacional del Petróleo, y especialmente para sus filiales Petrox y RPC, fueron originalmente establecidas por el empresario Ernesto Silva Bafalluy, uno de los puntales que tuvo la campaña presidencial de Joaquín Lavín. “Estas políticas –continúa- fueron aprobadas por el directorio de la época, presidido por José Piñera Echeñique, e integrado, entre otros, por el (ex) yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou”. Alguna vez casado con Verónica Pinochet Hiriart, Julio Ponce Lerou integra, junto a Büchi, Carlos Cáceres, Sergio de Castro, José Piñera y otros, la lista de “privatizadores”.

Tomando como punto de partida y base genérica el proceso de privatización de empresas estatales durante el régimen de Pinochet, “El saqueo...” sostiene que para ello fue determinante la confluencia, a fines de los '70, de intereses entre sectores identificados con lo que más tarde fue conocido como la UDI, más círculos militares y de los Chicago Boys, escenario en el que los civiles “de confianza” fueron ganando terreno.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  
CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN

Hernán Büchi. Con una considerable trayectoria en el gabinete de Pinochet –además de titular de Hacienda fue subsecretario de Salud y de Economía-, el ex candidato presidencial de la derecha, durante su gestión tomó fuerza el proceso de privatizaciones, de las que participó activamente en el caso de las eléctricas. Integró el directorio de varias empresas, alternada y coincidentemente con sus destinaciones ministeriales.

Mantiene vínculos con Julio Ponce Lerou –es vicepresidente de Soquimich-, con Alberto Kassis –en el directorio de Cecinas San Jorge-, y con Juan Hurtado, en el Holding Previsión y Seguros. También participa en Luchetti, Fallabella y Madeco.

Sergio de Castro. Ex ministro de Economía y Hacienda de Pinochet, considerado ideólogo del modelo “ultraliberal”, asesoró al régimen desde sus inicios. Una vez fuera de éste, participó en varios negocios, comenzando al alero de los Edwards –fue gerente y director del banco homónimo-, y continuando en el directorio de Soquimich, privatizada y controlada por Ponce Lerou.

También conocido por sus negocios en medios de comunicación fue uno de los propietarios de Copesa -junto a Juan Carlos Latorre y Alvaro Saieh-, pero vendió su parte en junio del año pasado.

En tándem con Latorre, se ha concentrado en los negocios inmobiliarios: participan en el Grupo Ecsa, que entre sus proyectos cuenta una urbanización de 500 hectáreas en la zona de Chicureo, con una inversión estimada en US\$620 millones.

Carlos Cáceres. Otro ex ministro de Hacienda, y el último titular de Interior que tuvo el régimen, cargos a los que suma la presidencia del Banco Central, entre 1982 y 1983.

[ceo@catios.udea.edu.co](mailto:ceo@catios.udea.edu.co)

<http://ceo.udea.edu.co>

Ciudad Universitaria Bloque 9-252 Telefax: 2105775



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  
CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN

En su trayectoria empresarial destaca claramente la presidencia que ejerce en la Compañía Chilena de Tabacos. Asimismo, participa en los directorios de Almacenes París y Carozzi.

En Enersis-Endesa se desempeñó como presidente del directorio, en reemplazo de Yuraszeck tras la crisis del Caso Chispas.

Tras su paso por la rectoría de la Universidad del Desarrollo, hoy preside el Instituto Libertad y Desarrollo. Julio Ponce Lerou. Estuvo casado con Verónica Pinochet Hiriart, vínculo que durante años -asegura el informe- le ayudó a cimentar una sólida posición económica.

En la CORFO ocupó los cargos de gerente de empresas y luego de gerente general. Debió dejar este último en 1983, en medio de un escándalo originado tras las suspicacias que despertó la rapidez de su fortuna.

También pasó por la entonces CTC e Iansa, hasta 1982. En paralelo presidió Soquimich y fue vicepresidente de Endesa.

Luego de renunciar a la firma minera en el '83, regresó en 1987 para privatizarla y luego presidirla, flanqueado por su socio Patricio Contesse. José Piñera Echeñique. Ex titular de Trabajo y Minería, participó en dos "obras" del régimen: la reforma previsional -junto a Büchi y Miguel Kast-, uno de los modelos exportables que han salido del país, y el Código de Minería.

Su trayectoria empresarial se centró en el área eléctrica: presidió Enersis y luego pasó al directorio de Endesa, el que abandonó en los '90. Tras una carrera política que no conoció grandes triunfos, se dedicó a consultorías y asesorías internacionales.

[ceo@catios.udea.edu.co](mailto:ceo@catios.udea.edu.co)

<http://ceo.udea.edu.co>

Ciudad Universitaria Bloque 9-252 Telefax: 2105775





UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  
CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN

Alvaro Saieh. Integró los directorios de diversas empresas estatales y asesoró al equipo económico de Pinochet. En los '80 estuvo en los directorios de firmas como Enaex y Chilgener.

Llegó al Banco Osorno, bajo la administración Abumohor/Kassis, y luego se asoció con De Castro y Latorre en la misma entidad, a la que se sumaron Provida y Copesa. En junio del 2000 les compró a ambos sus partes en el consorcio.

También lidera el grupo que controla el banco Corpbanca y Corpvida.

El informe de los parlamentarios de la Concertación marca la línea del tiempo de las indemnizaciones en un punto donde asoma el nombre de un íntimo de Joaquín Lavín: Ernesto Silva Bafalluy.

En su revisión histórica de las indemnizaciones en empresas fiscales, “El saqueo...” llega a nombres que se asocian el denominado Grupo Penta, señalado como uno de los “núcleos duros del poder político, económico y comunicacional” de la UDI y de Joaquín Lavín.

Entre esos nombres se destaca al hoy rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bafalluy, estratega de la campaña de Lavín e íntimo amigo suyo: fue su profesor en la Universidad Católica, padrino de bautismo de una de sus hijas y uno de sus cercanos que más influyen en él.

Tras desempeñarse en la Comisión Chilena del Cobre, pasó a la gerencia general de ENAP, donde estuvo hasta 1983: bajo su gestión se formó el holding del mismo nombre, y se diseñó la división en filiales.

[ceo@catios.udea.edu.co](mailto:ceo@catios.udea.edu.co)

<http://ceo.udea.edu.co>

Ciudad Universitaria Bloque 9-252 Telefax: 2105775

Pero también, sigue el texto, durante su administración se “estableció como política de la empresa finiquitar y pagar en forma previa al traspaso total de la indemnización acumulada hasta esa fecha. Se ha argumentado por la propia ENAP, a raíz de las controversias actuales, que ésta era una práctica frecuente en el sector privado, que permite iniciar una nueva relación laboral con la respectiva empresa”.

Al dejar la petrolera, el 17 de agosto de 1983, Silva Bafalluy debió “recibir una importante indemnización, pero su liquidación nunca se ha hecho pública”.

El propio Lavín también es mencionado por su paso por la presidencia del directorio de Petrox S.A. (1981-82). En 1983 renunció a ese cargo, permaneciendo como director. Sin embargo, nada se menciona de desahucios captados por el líder de derecha.

## **LA PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO**

**Ingº Juan Aigner**

**Por Sergio Marras**

Según muchos pronósticos de cierta ficción literaria relacionada a un futurismo político no menos especulativo, en estos tiempos deberíamos estar viviendo bajo un gobierno totalitario con una economía desastrosa y unos medios de comunicación poseídos por un régimen más o menos autoritario.

Los vaticinios de que viviríamos en una sociedad unívoca, manejada por algún Imperio del Mal vinculado a un complejo industrial militar, jerarquizado y amoral, que nos enviaría órdenes difundidas por un implacable sistema de comunicación pareciera, a simple vista, que no se cumplieron.

Sin embargo, si escarbamos la superficie de los estados y de sus cuerpos súbditos podemos encontrar sorpresas: las predicciones de los futuristas que hablaban de un gobierno mundial, de un sistema de comunicaciones perfectamente integrado a la cotidianidad de los ciudadanos, de una maquinaria política militar oscura e indeleble, y de una separación tajante entre los gobernantes y los gobernados está ocurriendo de otra manera.

La situación descrita se da en algunos de los estados latinoamericanos, como Chile, y se da bajo la forma de un Estado privado o invisible en el que detenta el poder gente sin cara y cuya institucionalidad virtual sólo conocen sus gestores y dueños.

En muchos países latinoamericanos, como es muy sabido, varias funciones importantes del Estado público han pasado a manos de esta especie de Estado privado invisible, al que se han traspasado las responsabilidades de servicio público del antiguo Estado abierto.

El nuevo regente, sin embargo, ha caído en las mismas o peores falencias que el desechado, lo que demuestra que al recibir la carga de demandas de países relativamente pobres, los privados no son más eficientes de lo que eran las antiguas empresas del Estado nacional.

Hay corporaciones a las que se han trasladado servicios como el agua, las líneas aéreas, las compañías de teléfono, la previsión, la salud, los ferrocarriles, y ya muestran teniendo defectos similares o peores que las que tenían las del Estado abierto, con la diferencia que las primeras tienen ganancias para sus dueños, de todas maneras, aunque sean ineficientes, y no pueden ser fiscalizadas por las instituciones de un Estado nacional que ha sido reducido.

No es raro encontrar servicios de urgencia de prestigiosas clínicas que hoy tienen una muy mala atención, o compañías de teléfonos que han encarecido los servicios, ampliándolos, es cierto, pero con una infraestructura insuficiente que funciona mal. O líneas aéreas que cambian itinerarios sin avisar o dejan abajo pasajeros por sobreventa.

### **La privatización de la política**

El Estado privado es tan poderoso que ha logrado en parte privatizar la política. En general, los políticos latinoamericanos, por las nuevas características del sistema económico, privilegian mucho más las relaciones con los empresarios que con la gente común. Y mantienen más informados a éstos que a quienes los eligieron. O al revés, la información la tienen que conseguir con ellos. No sería aventurado decir que hoy el Estado privado maneja más información que el Estado público.

Los gobiernos latinoamericanos podrían convertirse en las próximas décadas en simples guardaespaldas dedicados a cuidar los intereses de grupos mundiales cada día más relacionados y pequeños que manejarán el Estado nacional con gracia, sin quitarle a la gente su libertad, sino, por el contrario, haciéndola sentirse más libre a través de una falta de información real que la hará proporcionalmente más activa y menos pensante, cada vez más individualista, con hombres y mujeres esclavizados por las deudas, por la ignorancia de las claves del poder y, además, por sentir la felicidad que todo ocurra así.

Ese es un control invisible similar a los que los futuristas de los '50 proclamaron para el Estado público de los '90, y que aparece hoy en un Estado privado multinacional que nadie, ni siquiera las autoridades del Estado abierto, conocen a cabalidad.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  
CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN

Las personas comunes lo padecemos en medio de una sonriente ingenuidad que identificamos con la modernidad, el siglo que viene o el cómo no nos habíamos dado cuenta antes. La verdad es que el latinoamericano de a pie está siendo cada vez más explotado, aprende cada vez menos y la brecha material y espiritual con la casta superior es mayor.

Salvo la burocracia y la tecnocracia que está siendo preparada por el estado privado para gobernar -a la que ha incorporado a antiguos y conspicuos defensores del Estado nacional-, el resto sólo se limita a observar cómo en nombre del progreso está siendo cada vez más desvalido y expoliado por un Estado privado donde la solidaridad es un espectáculo televisivo y no una postura nacional.

Al parecer, sólo la democratización real de lo local, lo regional y lo nacional, además de la integración internacional, desde los estamentos más bajos de la organización social, podrían sacar a la luz a este nuevo Estado particular sin cara que está comenzando a invadir todos los ámbitos de la vida cotidiana y fiscalizarlo. Para eso es imprescindible que en América Latina se mantengan y amplíen organizaciones civiles que defiendan los intereses de la gente común, demandando la transparencia completa de la información de todos los entes y personas que detenten poder, públicos o privados.

Para ejemplo, una perla: revise las utilidades de los bancos privados en lo que va del año y, por otro, vea las cifras de estancamiento de los ingresos en la gran mayoría de nuestros países. ¿Cómo calza esa ecuación?

[ceo@catios.udea.edu.co](mailto:ceo@catios.udea.edu.co)

<http://ceo.udea.edu.co>

Ciudad Universitaria Bloque 9-252 Telefax: 2105775